

Rancagua, a uno de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, en Sala integrada por los jueces señora Paulina Chaparro Bossy, quien presidió, señor David Gómez Palma y señor Hernán González Muñoz, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en la causa **RIT N° 424-2019, RUC N° 1801242306-K**, seguida en contra del acusado **MIGUEL ANTONIO VARGAS AYALA**, cédula de identidad N° 16.465.205-K, nacido el 16 de marzo de 1987, soltero, 35 años, técnico computación, domiciliado en Avenida El Sol, Block 1276 depto. 306, población Algarrobo 3 de Rancagua.

Sostuvo la acusación por el Ministerio Público la Fiscal Adjunto de Rancagua doña Claudia de la Fuente Jiménez, en tanto que la defensa del acusado estuvo a cargo del Defensor Penal Público don Saúl Quiroz Bedoya, ambos con domicilio y forma de notificación ya registrados en el Tribunal.

SEGUNDO: Que la acusación del ente persecutor se fundó en los siguientes antecedentes:

“El imputado quebranta la prohibición que se le impuso por el Juzgado de Garantía de Rancagua en causa Rit 13575-2018 en audiencia de fecha 17 de diciembre de 2018 en que se le prohibió acercarse a doña Myriam del Carmen Ayala Carrasco, madre del imputado, en especial al domicilio de Pje. La Chimba N° 992 de Rancagua, se le impuso ello a título de medida cautelar en causa Rit 13575-2018 del Juzgado de Garantía de Rancagua, ocasión en que el imputado estaba presente en audiencia en que se resolvió dicha cautelar, en que se le prohibió acercarse a la víctima a su domicilio o dónde ésta se encuentre, el imputado desoyó las prohibiciones y el día 01 de enero de 2019, alrededor de las 21.00 horas, el imputado llegó hasta el domicilio de la víctima ubicado en Pje. La Chimba N° 992 de Rancagua, llegó de manera violenta exigiendo dejarlo entrar y golpeando, ante la negativa de la víctima, él tomó un palo, comenzó a golpear las paredes y ventanas del domicilio, ingresó finalmente, se negó a salir pese a que así fue combinado por la víctima, hasta que ella debió solicitar el auxilio de Carabineros quienes lo sorprendieron en delito flagrante y lo hicieron salir”

El Fiscal califica los hechos como delito de desacato en contexto de violencia intrafamiliar, tipificado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 10, 15 y 18 de la Ley 20.066 en grado de desarrollo consumado.-

A juicio de la Fiscalía, al imputado Miguel Antonio Vargas Ayala, es autor ejecutor de los hechos materia de la presente acusación.

Concorre en la especie la agravantes del artículo 12 N° 16 del Código Penal.

Pidió imponer la pena de 3 años y un día de reclusión menor en su grado medio, más las accesorias especiales del artículo 9 letras b) y d) de la Ley 20.066, por el lapso de 2 años, demás accesorias legales y costas de la causa.

TERCERO: El **Ministerio Público en su alegato de apertura** reiteró los antecedentes de la acusación y que rendiría prueba suficiente para acreditar los delitos y la participación del acusado.

En su **alegato de clausura** la fiscal señaló que se habían probado el hecho y la participación pese a que no habían declarado las víctimas, esto con la declaración de los carabineros que lo detuvieron y se estableció, además, que tenía prohibición de acercarse al domicilio lo que constaba en las actas del Juzgado.

En su Replica señaló que la jurisprudencia exige que el error sea invencible o inevitable empleando toda su diligencia y es en base al caso concreto, debiendo tener presente que el acusado no es un principiante en el delito, ha sido denunciado ocho veces antes, ha sido condenado por el mismo delito, por lo que sabe las consecuencias de incumplir una orden del tribunal y no operaría el error de prohibición.

Agregó que respecto al acta del tribunal de familia la víctima había hecho muchas denuncias, una en familia que se declaró incompetente y en este caso fue acusado por la infracción a la medida del Juzgado de Garantía que estaba vigente, que era más cercana, de un procedimiento en que participó el mismo funcionario, además el imputado recordaba haber sido detenido y no podía acercarse.

CUARTO: Que la **defensa del acusado en su alegato de apertura** pidió la absolución haciendo presente que el 17 de diciembre de 2019 su defendido fue pasado a control de detención por supuesto incumplimiento del Tribunal de Familia que no había sido notificada, no hubo además desacato porque su madre lo invitó ese día, siempre ha sido llamado y son los familiares los que llaman a carabineros porque la madre siempre ha querido darle una oportunidad. En definitiva, su defendido ha sido objeto de error de prohibición que lo lleva a caer en el error que está autorizado para ir a ese domicilio.

La defensa en su **alegato de clausura** reiteró que se debía absolver porque la ausencia de información de los testigos su madre y hermana no podía ser en contra de su representado por el principio in dubio proreo, en ningún caso se pone en duda la teoría de la defensa que se basa en la versión de su defendido, porque incluso el palo lo uso para defenderse.

Agregó que la invitación de su familia lo confunde y lo hace pensar que puede ir al domicilio de su madre y por ello no cree estar vulnerando la orden del tribunal, el esta confundido.

Además, se debe absolver porque ambos carabineros fundaron su participación en un acta de un tribunal de familia que no se conoce y no se sabe si estaba notificada, en base a eso estaban en ese domicilio y desde el punto de vista técnico no está probado el desacato.

En la Replica señaló que las anteriores ocho denuncias tampoco están probadas y respecto de condenas anteriores no se relacionaban con los hechos discutidos en la causa y no implicaba que no entendiera una situación o algún tipo de error, además, que fuese invencible tenía que ver con la capacidad intelectual de una persona, no se había probado por la fiscalía que su defendido estuviese en condiciones mentales de entender lo ordenado.

QUINTO: Que prestó **declaración el acusado Miguel Antonio Vargas Ayala** renunciando a su derecho a guardar silencio y expuso que ese día estaba quedándose en la casa de su primo, pero que siempre pasaba las fiestas con su mamá, fue a su casa, estaban sus familiares, el problema nunca fue con su mama sino con su cuñado con quien se lleva mal y a través de su hermana se dio el problema, porque ella llamó a carabineros, les dijo que él estaba cometiendo un desacato, llegaron los carabineros y lo detuvieron, pero lo había invitado su mamá.

Consultado por la fiscal dijo que vivía en Avenida El Sol block 1276, departamento 306 de Rancagua, que sabía que no podía acercarse, tenía claro pero ella lo invitó a una reunión familiar y lo invitó, lo detuvieron en el mismo domicilio, estaba con ellos ahí.

Agregó que estuvo con ellos los días 29, 30, pasó las fiestas con ellos, en la casa de su madre sabiendo que tenía la orden de alejamiento. Ese día no consumió alcohol los días anteriores estaban de fiesta su hermano, su hermana, sobrino cuñado, la convivencia era familiar estaba toda la familia, su abuela su tata, uno que otro vecino.

Sostuvo que tuvo una discusión con su cuñado Pablo quien creyó que estaba haciendo una maldad en la casa, entraron su mama, su hermana, estaban discutiendo, él se fue con su madre y su hermana quedó con su cuñado, éste reaccionó mal lo intentó agredir, tomó un palo de dentro de la casa.

Indicó que fue su hermana quien llamó a carabineros y lo llevaron detenido por estar incumpliendo una orden decretada.

A las preguntas de la defensa reiteró que su madre lo había invitado, que siempre lo hacía nunca pasó por sus mentes la orden de alejamiento, él y su madre se percataron de la orden cuando llegó carabineros, la invitación la deja sin efecto su familia, no quiere ser irrespetuoso con el tribunal en ningún momento quiso pasar a llevar, fue espontaneo, no tenía noción de las consecuencias.

SEXTO: Que la **prueba del Ministerio Público** consistió en:

Prueba testimonial: 1.- Luis Barría Cárcamo, carabinero. 2.- Walter Cifuentes Levio, carabinero.

Prueba documental: 1.- Certificado de nacimiento del acusado, nombre del padre José Miguel Vargas Vilches, padre, nombre de la madre Miriam Del Carmen Ayala Carrasco. 2.- Acta de audiencia de fecha 17 de diciembre de 2018, causa RUC1801242306-k, RIT 13575-2018. 3.- Certificado de vigencia de cautelares de fecha 17 de enero de 2019 emitido por el Juzgado de Garantía de Rancagua. 4.- Extracto de filiación para efectos del artículo 343 del CPP.

Que, la **defensa no rindió prueba** en el juicio.

SEPTIMO: Que como se adelantó en la deliberación de este Tribunal, de conformidad a lo previsto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, se llegó a la convicción por unanimidad de sus miembros de condenar al imputado Miguel Antonio Vargas Ayala como autor de un delito consumado de desacato en contexto de violencia intrafamiliar previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil con relación a los artículos 10, 15 y 18 de la Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.066 por el hecho cometido el día 1 de enero de 2019, en la comuna de Rancagua.

Al respecto, la decisión condenatoria se basó en que con la prueba rendida en el juicio **se tuvo por acreditado:**

“Que el imputado Miguel Antonio Vargas Ayala el día 1 de enero de 2019, alrededor de las 21.00 horas, quebrantando la medida cautelar de prohibición de acercarse a su madre Myriam del Carmen Ayala Carrasco, impuesta por el Juzgado de Garantía de Rancagua, llegó hasta el domicilio de ella, ubicado en Pje. La Chimba N° 992 de Rancagua, de manera violenta exigiendo que lo dejara entrar, golpeando con un palo las paredes y ventanas del domicilio, ingresó, se llamó a carabineros quienes lo sorprendieron en delito flagrante.

Que la medida cautelar del Juzgado de Garantía de Rancagua, que se ordenaba cumplir, se había impuesto en causa Rit 13575-2018, en audiencia de fecha 17 de diciembre de 2018, en que se prohibió al acusado acercarse a su madre doña Myriam del Carmen Ayala Carrasco y a su domicilio de pasaje La Chimba N° 992 de Rancagua.

Que el imputado al imponerse la medida cautelar referida estaba presente en audiencia en que se resolvió dicha cautelar, en que se le prohibió acercarse a su madre, a su domicilio o dónde ésta se encuentre.”

Se llegó a esta conclusión más allá de toda duda razonable valorando la prueba rendida por el ministerio público, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, tal como se explica a continuación.

EN CUANTO AL HECHO PUNIBLE

OCTAVO: Que para tener por acreditado el hecho punible en la forma como se ha indicado en el Considerando anterior, se contó con la prueba proporcionada por el ministerio público consistente en la declaración de los testigos presenciales y directos los funcionarios de

carabineros don Luis Barría Cárcamo y don Walter Cifuentes Levio, quienes dieron una versión coherente y coincidente en las circunstancias esenciales del hecho y la participación del acusado, además, versión que fue complementada con prueba documental que dio cuenta de la existencia de una medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima que pesaba sobre el acusado, resolución judicial que incumplió concurriendo al domicilio de doña Miriam del Carmen Ayala Carrasco.

Así, el funcionario de carabineros, sargento don **Luis Barría Cárcamo** relató que el día 1 de enero de 2019 alrededor 22,45, fueron al domicilio ubicado en pasaje Las Chimbas 992, de la población Diego Portales, donde entrevistaron a la víctima, la señora Miriam Vargas Carrasco quien les dijo que momentos antes había llegado su hijo – el acusado Miguel Antonio Vargas Ayala - el cual mantenía una prohibición de acercarse a su domicilio, por lo que esta persona intentó ingresar, a la negativa de ella comenzó a golpear la reja del antejardín y había ingresado por el portón que estaba abierto, los llamó, les exhibió un documento emanado del tribunal de familia, que consistía en una prohibición de acercarse a su domicilio vigente, la persona estaba en el exterior del domicilio, en la salida del antejardín y lo detuvieron.

Indicó que se levantaron actas, acta de notificación de derechos del imputado, que firmó y en ella se indicaba el domicilio del imputado era en pasaje Benito 1276 de Renca Santiago.

Señaló que ese día andaba con otro funcionario, se entrevistó con la víctima, conocía el domicilio porque había ido por el mismo motivo el 17 de diciembre de 2018, en que había adoptado el mismo procedimiento con respecto al acusado, estaba notificado desde del 16 de diciembre por los mismos hechos, había ido su hijo al domicilio de su madre para pedirle dinero en la madrugada, fue detenido el imputado Vargas Ayala por el delito de lesiones menos graves.

Precisó que la víctima se veía afectada por las llegadas de su hijo, siempre llegaba bajo los efectos de las drogas, siempre tratando de intimidarla.

En el mismo sentido prestó declaración don **Walter Cifuentes Levio**, cabo primero de carabineros, que participó en el procedimiento junto a don Luis Barría Cárcamo, que terminó con la detención del acusado el día 1 de enero de 2019.

En su relato señaló que el día 1 de enero de 2019 se encontraba trabajando con el sargento segundo Luis Barría Cárcamo en el cuadrante de la Comisaría Diego Portales, por radio se les comunicó un procedimiento por violencia intrafamiliar en calle La Chimba N° 992 de Diego Portales, fueron a verificar la medida cautelar de esta persona que había llamado.

Agregó, que al llegar al lugar se entrevistaron con la víctima – doña Miriam del Carmen Ayala Carrasco- quien mantenía, según les dijo, una medida cautelar del Tribunal de Familia de Rancagua y señala que su hijo no se puede acercar al domicilio. Ella manifestó que minutos antes había llegado su hijo golpeando las puertas para que abriera la reja para poder ingresar,

luego el imputado comenzó a gritarle que le abriera la puerta del domicilio, en ese momento llegaron ellos cuando el sujeto estaba al exterior del domicilio y la madre presentó la medida cautelar del Tribunal de Familia, el imputado les señaló que tenía domicilio en la comuna de Renca.

NOVENO: Que junto a los testimonios de los funcionarios, se corroboró que al momento de ser detenido Vargas Ayala pesaba en su contra una resolución judicial vigente, lo que se acreditó con la copia del Acta de Audiencia de fecha 17 de diciembre de 2018, causa RUC1801242306-k, RIT 13575-2018, en que Vargas Ayala estuvo presente en la audiencia, se decretó respecto de su madre Miriam Ayala Carrasco, la medida cautelar del artículo 9 letra b de la Ley 20.066, esto es, la prohibición absoluta de acercarse a la víctima o su domicilio ubicado en La Chimba 992 de Rancagua o su lugar de trabajo o donde se encuentre. También constaba en dicha copia que el domicilio del imputado era San Benito 1276 de la comuna de Renca. Esta medida cautelar se encontraba vigente al 1 de enero de 2019, lo que también se confirma con el certificado de vigencia de cautelares de fecha 17 de enero de 2019, emitido por Felipe Gaspar Candia en causa RIT 13575-2018, Jefe de unidad de causas (s), Juzgado de Garantía, que certificó dicha vigencia.

DECIMO: Que el Tribunal estimó que para efectos de tener por configurado el hecho punible no afectaba que los funcionarios de carabineros hubiesen dicho que la madre del acusado les había mostrado una medida cautelar de prohibición de acercamiento del Juzgado de Familia, porque ello pudo deberse a un error, o que como sostuvo la fiscal era la misma causa que luego el Juzgado de Familia se declaró incompetente.

Pero, en definitiva, ello no afecta a la existencia del hecho punible, ya que, se acreditó que al momento que llegó carabineros el 1 de enero de 2019, el acusado tenía una medida cautelar de prohibición de acercarse al domicilio de su madre impuesta en virtud del artículo 9 letra b) de la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar, decretada por el Juzgado de Garantía de Rancagua en la causa penal indicada, la que estaba vigente y se estaba incumpliendo por el acusado al encontrarse en el domicilio de su madre.

Asimismo, el ministerio público acreditó la relación de parentesco existente entre la víctima doña Miriam Ayala Carrasco y el acusado Miguel Vargas Ayala, de madre e hijo, respectivamente para los efectos de la aplicación de la Ley de Violencia Intrafamiliar Nº 20.066.

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS

UNDECIMO: Que los hechos que se ha tenido por acreditados configuran, como se indicó en la deliberación, el delito de desacato en violencia intrafamiliar previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil con relación a los artículos 10, 15 y 18 de la Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar.

En este sentido, el artículo 240 del CPC establece que “el que quebrantare lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo”.

Además, el artículo 10 de la Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar establece expresamente que “Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra d) del artículo 9º, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días. La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente”.

Asimismo, de acuerdo al artículo 15 de la misma ley, las medidas cautelares puede ser decretadas en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establece el artículo 92 de la ley Nº 19.968 y las aludidas en el artículo 7º de esta ley.

Por último, el artículo 18 del mismo cuerpo legal previene que en caso de incumplimiento de una medida cautelar es aplicable lo dispuesto en el artículo 10 ya citado.

DUODECIMO: Que, en la especie, el acusado habiendo sido notificado personalmente de la medida cautelar del artículo 9 letra b) de la Ley 20.066, esto es, la prohibición absoluta de acercarse a la víctima o a su domicilio, o donde se encontrase, porque se encontraba presente en la audiencia efectuada en el Juzgado de Garantía de Rancagua, en que se le impuso la medida en cuestión, respecto de su madre Miriam Ayala Carrasco, quebrantó lo ordenado cumplir al concurrir al domicilio de ésta el 1 de enero de 2019, mientras se encontraba vigente dicha medida cautelar, configurándose el tipo penal del desacato.

PARTICIPACIÓN Y GRADO DE DESARROLLO

DECIMOTERCERO: Que la acción de quebrantar lo ordenado cumplir, esto es, no acatar las resoluciones judiciales que le imponía la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y su domicilio, la realizó de manera directa el acusado Miguel Antonio Vargas Ayala, por lo que es autor ejecutor, tenía el dominio del hecho e incumplió la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Garantía de Rancagua, la que estaba vigente al momento de los hechos.

El actuar del acusado denota dolo porque con conocimiento de la resolución que le imponía la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, ya que, había sido notificada de ella en forma personal en la audiencia respectiva de fecha 17 de diciembre de 2018, de forma voluntaria y queriendo hacerlo dejó de cumplir o sea quebrantó la resolución concurriendo al

domicilio de la víctima siendo detenido en flagrancia por los funcionarios de carabineros que depusieron en el juicio.

En cuanto al grado de desarrollo del delito fue en grado de consumado, esto es, el autor del delito, el acusado Vargas Ayala desplegó toda la conducta del tipo penal hasta su término, esto es, quebranto o violó la orden que emanaba a través de una resolución del Juzgado de Garantía, que le impedía concurrir al domicilio de la víctima o acercarse a ella.

ALEGACIONES DE LA DEFENSA

DECIMOCUARTO: Que la defensa del acusado sostuvo la tesis que su representado había incurrido en un error de prohibición porque madre lo había invitado ese día, que siempre lo había llamado, que no fue ella la que llamó a carabineros porque la madre siempre había querido darle una oportunidad, siempre lo llamaba lo que lo confundía y lo llevaba al error que estaba autorizado para ir a ese domicilio.

Esto será descartado, dado que la prueba aportado da cuenta que en ningún caso la información que dio la madre a los funcionarios de carabineros era que ella lo hubiese invitado, además, que uno de los funcionarios notó a la víctima, la madre muy afectada, además, fue su propia madre quien llamó a carabineros y quien les exhibió la medida cautelar que tenía para resguardo de su hijo.

Entonces no hay sustento para sostener que el acusado se hubiese confundido con la actitud de la madre, que lo invitaba, lo que a la luz de los antecedentes del juicio resultó no ser efectivo.

Por otro lado, incurre en error de prohibición el sujeto que cree estar obrando conforme a derecho, aunque en realidad realiza una acción típica y antijurídica, o sea, aquel que tiene un falso concepto de la licitud de su actuar, no necesariamente de su punibilidad, constituye este error una exclusión de la conciencia de antijuridicidad elemento de la culpabilidad.

En este caso resulta que el sujeto tiene conciencia de la ilicitud de su conducta sabe que tiene una prohibición impuesta y pretende que tuvo una autorización que lo liberó de ello, sin embargo, dicho fundamento fáctico carece de todo sustento y la prueba, como se dijo dió cuenta, que la madre no le pidió ir a su casa o si no le hubiese abierto la puerta, ella hizo lo contrario llamó a la policía y denunció al infractor, como era su hijo, por lo que ningún indicio de lo aseverado por el acusado en su declaración se encontró en el obrar de su madre..

En definitiva, por lo referido se debe descartar la teoría del caso de la defensa y condenar al acusado como se ya se ha indicado.

DETERMINACION DE LA PENA

DEICMOQUINTO: Que en la **audiencia de determinación de pena del artículo 343** del Código Procesal Penal el **ministerio público** mantuvo su pretensión punitiva de la acusación y agregó que concurría en la especie la agravante del artículo 12 Nº 16 del Código Penal, esto es, reincidencia específica, para ello incorporó el extracto de filiación y copia de sentencia en que consta que el acusado fue condenado por el delito de desacato en la causa 14.572-2016 del Juzgado de Garantía de Rancagua, sentencia de 5 de abril de 2017, a la pena de 541 días de presido menor en su grado medio, hechos del 29 de noviembre de 2016, se concedió pena sustitutiva de reclusión parcial nocturna domiciliaria, ejecutoriada el mismo día y se acompañó sentencia con copia de certificado ejecutoriada.

Refirió en la réplica que no procedería la prescripción porque se cuenta de hecho a hecho.

La **defensa** pidió se eximiera pago de costas de la causa, por estar privado de libertad por causa diversa, que no se considerara la agravante porque los hechos de la causa anterior estarían prescritos, según el artículo 104 del Código Penal, en cuya virtud no se deberían tomar en cuenta los hechos transcurridos cinco años desde que ocurrieron. Solicitó la pena de 541 de presido menor en su grado medio, y considerar los abonos consignados en el auto de apertura por el arresto domiciliario total.

DECIMOSEXTO: Que en la determinación de la pena se debe tener presente que el delito de desacato según el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil se castiga con reclusión menor en su grado medio a máximo.

Por su parte, se acogerá la agravante de reincidencia específica del artículo 12 Nº 16 del Código Penal, haber sido condenado el culpable por delito de la misma especie. En este caso según da cuenta el extracto de filiación, la copia de sentencia y el certificado de ejecutoria incorporadas por la fiscal, el imputado fue condenado anteriormente por el mismo delito en la causa Rit 14.572-2016 del Juzgado de Garantía de Rancagua, sentencia de 5 de abril de 2017, y por hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2016.

Dicha condena para estos efectos no se encuentra prescrita como alegó la defensa, dado que desde la comisión del hecho en la sentencia 29 de noviembre de 2016 al 1 de enero de 2019 no habían transcurrido los plazos de prescripción para no ser considerada.

En atención a lo anterior, de conformidad al artículo 68 del Código Penal, por concurrir una agravante, y considerando la extensión del mal causado se impondrá la pena en su máximo de tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo, accesorias generales y la especial del artículo 9 letra b de la Ley de Violencia Intrafamiliar Nº 20.066.- por el lapso de dos años.

DECIMOSEPTIMO: Que, no reuniendo los requisitos legales de la Ley Nº 18.216 para acceder a una pena sustitutiva de la Ley 18.216 deberá cumplir de manera efectiva la pena

corporal que se impone en esta sentencia sirviendo de abono a ellas el tiempo que estuvo en arresto domiciliario total desde 2 de enero de 2019 al 19 de agosto de 2019 un total de 230 días.

COSTAS

DECIMOCTAVO: Que, por último, no se condenará al pago de las costas de la causa al acusado por haber sido asesorado por la defensoría penal pública en la causa y tuvo motivos plausibles para litigar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1°, 12 N° 16, 14 N° 1, 15 N° 1, 30, 50, 67, 68, 69 del Código Penal; 240 del Código de Procedimiento Civil, 1 y siguientes de la Ley N° 20.066, 1, 47, 295, 297, 340, 343, 348, 351 del Código Procesal Penal, **SE DECLARA:**

I.- Que se **CONDENA a MIGUEL ANTONIO VARGAS AYALA**, ya individualizado, a sufrir la pena de **TRES AÑOS Y UN DIA (3 AÑOS 1 DIA) DE RECLUSION MENOR EN SU GRADO MAXIMO**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; a la accesoria especial del artículo 9 letra b) de la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar, esto es, la prohibición absoluta de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente, por el lapso de dos años, como autor ejecutor del **DELITO DE DESACATO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, en carácter de consumado, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil con relación a los artículos 10, 15 y 18 de la Ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar, por el hecho cometido el día 1 de enero de 2019, en la comuna de Rancagua.

II.- Que la pena corporal que se impone privativa de libertad, deberán cumplirse de manera efectiva, porque el sentenciado no reúne los requisitos para sustituir dicha sanción por alguna de las penas sustitutivas de la Ley 18.216.

Le servirá de abono para el cumplimiento de las pena impuesta el tiempo que estuvo en arresto domiciliario total desde el 2 de enero de 2019 hasta el 19 de agosto de 2019, un total de 230 días.

III.- Que no se condena en costas al sentenciado.

Una vez ejecutoriada la sentencia, remítanse los antecedentes al Juzgado de Garantía correspondiente para su cumplimiento y ejecución.

Oficiese al Servicio Electoral, si corresponde, para los fines que procedan de conformidad a la Ley 18.556.

Se deja constancia que para los efectos de la publicación de esta sentencia en el sitio web del Poder Judicial no existen datos que reservar.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redactó el juez señor Hernán González Muñoz.

RIT N° 424-2019

RUC N° 1801242306-K

Dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, en Sala constituida por los jueces titulares señora Paulina Chaparro Bossy, señor David Gómez Palma y señor Hernán González Muñoz.

Se deja constancia que la Juez Paulina Chaparro Bossy, no firma la sentencia que antecede, no obstante haber estado presente el juicio oral y en la decisión, por encontrarse con licencia médica.